

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

15ª REUNIÓN — 9ª SESIÓN ORDINARIA — 22 DE MAYO DE 1996

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,

doctor **CARLOS F. RUCKAUF**,

y del señor presidente provisional del Honorable Senado,

doctor **EDUARDO MENEM**

Secretarios: doctor **EDGARDO R. PIUZZI**

y doctora **MATILDE DEL VALLE GUERRERO**

Prosecretarios: señor **MARIO L. PONTAQUARTO** y doctor **DONALDO A. DIB**

PRESENTES:

AGÜNDEZ, Jorge A.
ALASINO, Augusto
ALMIRÓN, Carlos H.
ANGELOZ, Eduardo C.
AVELÍN, Alfredo
BAUM, Daniel
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRANDA, Ricardo A.
BRAVO, Leopoldo
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CANTARERO, Emilio M.
DE LA ROSA, Carlos L.
DE LA RÚA, Fernando
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela
FIGUEROA, José O.
GAGLIARDI, Edgardo J.
GALVÁN, Raúl Alfredo
GENOUD, José
GIOJA, José L.
HUMADA, Julio C.
LEÓN, Luis A.
LÓPEZ, Alcides H.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MANFREDOTTI, Carlos
MARANGUELLO, Pedro C.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAYA, Héctor M.
MELGAREJO, Juan I.
MENEGHINI, Javier Reynaldo

MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio
MOREAU, Leopoldo Raúl Guido
OUDIN, Ernesto R.
OYARZÚN, Juan Carlos
PARDO, Angel F.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
PRETO, Ruggero
QUINZIO, Bernardo P.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
SÁEZ, José M.
SALA, Osvaldo R.
SALUM, Humberto E.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
TELL, Alberto M.
USANDIZAGA, Horacio D.
VAQUIR, Omar M.
VERNA, Carlos A.
VILLARROEL, Pedro G.
VILLAVEVERDE, Jorge A.
YOMA, Jorge R.
ZALAZAR, Horacio A.

AUSENTES. CON AVISO:

REUTEMANN, Carlos Alberto
VACA, Eduardo P.

CON LICENCIA:

AGUIRRE LANARI, Juan R

EN COMISION:

COSTANZO, Remo J.
DE LA SOTA, José M.

6. Por indicación de la **Presidencia** se pasa a cuarto intermedio para constituir la Cámara en Tribunal de Juicio Político. (Pág. 2317.)
7. A moción del señor senador **Massat** se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador **Massat** por el que se regula la transferencia de bienes de propiedad de Ferrocarriles Argentinos a las cooperativas de trabajadores ferroviarios (S.-1.221/95). (Pág. 2318.)
8. Consideración sobre tablas del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el presupuesto de la administración pública nacional vigente para la jurisdicción 20 - Presidencia de la Nación - Subjurisdicción 12 - Secretaría de Desarrollo Social (C.D.-11/96). Se aprueba. (Pág. 2322.)
9. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Legislación General en el proyecto de ley del señor senador **Martínez Almudevar** por el que se modifica el Código Penal en lo referido al hurto y/o robo de automotores. Se aconseja aprobarlo con modificaciones (S.-259/95). Se aprueba. (Pág. 2322.)
10. Consideración del dictamen de las comisiones de Cultura, de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de los señores senadores **Ludueña** y **Cendoya** por el que se instituye un concurso nacional y anual de ensayos a denominarse "Concurso Anual del Honorable Senado de la Nación - Legislador **José Hernández**", sobre el tema "Identidad y futuro de la Argentina" (S.-1.741/95). Se aprueba. (Pág. 2330.)
11. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador **Avelín** por el que se solicita un subsidio para el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Las Lomitas, departamento Albardón, San Juan (S.-1.945/95). Se aprueba. (Pág. 2332.)
12. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador **Figuerola** por el que se solicita se incremente la partida presupuestaria destinada al Programa de Rehabilitación del Hábitat Rural en Zonas Chagásicas, destinada a la provincia de Santiago del Estero (S.-1.708/95). Se aprueba. (Página 2333.)
13. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador **Romero Feris** por el que se solicita una subvención anual para la Biblioteca Argentina para Ciegos (S.-33/95). Se aprueba. (Pág. 2334.)
14. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador **Avelín** por el que se solicita un subsidio para la Unión Vecinal Villa Congreso, departamento de Rawson, San Juan (S.-1.946/95). Se aprueba. (Pág. 2335.)
15. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Interior y Justicia en el proyecto de ley del señor senador **Branda** por el que se introducen reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (S.-553/96). Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2336.)
16. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Turismo en el proyecto de comunicación del señor senador **Sala** y otros señores senadores por el que se solicita se exima del impuesto al valor agregado a los servicios brindados por hoteles a pasajeros residentes en el extranjero (S.-436/96). Se aprueba. (Pág. 2349.)
17. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, suscrito en Montreal, Canadá, el 1º de marzo de 1991 (P.E.-912/95). Se aprueba. (Pág. 2350.)
18. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador **Oyarzún** por el que se solicita se organice un nuevo viaje al cementerio de Puerto Darwin, islas Malvinas, y al lugar donde fuera hundido el crucero ARA "General Belgrano" (S.-1.344/95). Se aprueba. (Pág. 2355.)
19. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador **Romero Feris** por el que se solicitan informes acerca de las medidas que se han instrumentado para otorgar el reconocimiento por parte de la República Argentina a la ex República Yugoslava de Macedonia (S.-1.396/95). Se aprueba. (Pág. 2356.)
20. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador **Mac Karthy** por el que se solicita se restablezcan las tratativas para la habilitación de una delegación de la FAO en nuestro país (S.-1.584/95). Se aprueba. (Pág. 2355.)
21. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de los señores senadores **Genoud** y de la Rúa por el que se solicita se declare de interés nacional la edición y difusión del Boletín "CD ROM del 50º Aniversario", conmemorativo del aniversario de las Naciones Unidas (S.-1.482/95). Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2359.)
22. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comu-

8

MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el presupuesto de la administración pública nacional vigente para la jurisdicción 20 - Presidencia de la Nación - Subjurisdicción 12 - Secretaría de Desarrollo Social. (Orden del Día N° 353.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (*Lee*)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social han considerado el proyecto de ley en revisión registrado bajo el número C.D.-11/96, modificando el presupuesto de la administración pública nacional vigente para la jurisdicción 20 - Presidencia de la Nación - Subjurisdicción 12 - Secretaría de Desarrollo Social; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.

De acuerdo al artículo 120 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 24 de abril de 1996.

Carlos A. Verna. — Julio A. Miranda. — Alcides H. López. — Ricardo A. Branda. — Alberto M. Tell. — César Mar Karthy. — Augusto Alasino. — Antonio F. Caffero. — Luis A. León. — Emilio M. Cantarero. — Carlos H. Almirón. — José L. Gioja. — Héctor M. Maya. — Jorge A. Villaverde. — Eduardo C. Angeloz. — Antonio T. Berhongaray. — José Genoud. — José A. Romero Ferris.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(17 de abril de 1996)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º. — Modifícase el presupuesto de la administración pública nacional vigente para la Jurisdicción 20 - Presidencia de la Nación - Subjurisdicción 12 - Secretaría de Desarrollo Social incrementando la respectiva partida en tres millones seiscientos mil pesos (\$ 3.600.000).

Art. 2º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIUZZI.
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

ACLARACION:

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por los diputados Lamberto y Machado.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

9

HURTO Y/O ROBO DE AUTOMOTORES

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Legislación General en el proyecto de ley del señor senador Martínez Almudevar por el que se modifica el Código Penal en lo referido al hurto y/o robo de automotores. Se aconseja aprobarlo con modificaciones (Orden del Día N° 214).

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (*Lee*)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Legislación General, han considerado el proyecto de ley —reproducido— S.-259/95 (Ref.: S.-1/93) del señor senador Martínez Almudevar por el que se modifica el Código Penal en lo referido al hurto y/o robo de automotores; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su sanción con la siguiente modificación:

Artículo 2º: Deróganse los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del decreto ley 6.582/58, ratificado por ley 14.467.

De conformidad con lo establecido por el artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 17 de abril de 1996.

Bernardo P. Quinzio. — Jorge A. Agúndez. — Jorge D. Solana. — Jorge R. Yoma. — Horacio A. Zalazar. — Angel F. Pardo. — José Genoud. — Alcides H. López. — Pedro G. Villarreal. — Graciela Fernández Meijide.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Modifícase el Código Penal de la siguiente manera:

1º — Incorpórase como inciso 6 del artículo 163, el siguiente:

Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público.

2º — Sustitúyese el inciso 3 del artículo 163, por el siguiente:

Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida.

3º — Sustitúyese el artículo 289, por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

1. El que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas o legalmente requeridas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las aplicare a objetos distintos de aquellos a que debían ser aplicados.
2. El que falsificare billetes de empresas públicas de transporte.
3. El que falsificare, alterare o suprimiere la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la ley.

Art. 2º — Deróganse los artículos 33, 34, 35, 36, 38 y 39 del decreto ley 6.582/58, ratificado por ley 14.467.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Enrique Martínez Almudevar.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Al sancionarse la ley 23.077/84 se derogaron varias leyes de facto y por consiguiente volvieron a tener vigencia otras que a su vez habían sido derogadas por éstas. Es el caso del decreto ley 6.582/58, sobre Registro Nacional de la Propiedad Automotor, en sus disposiciones penales. Al mismo tiempo volvieron a replantearse las diferencias interpretativas, doctrinarias y jurisprudenciales de esas normas.

El auge de la modalidad delictiva denominada "autos dobles" o "autos truchos" que, a grandes rasgos, comprende el hurto o robo de automotores similares, la adulteración de la numeración de la carrocería y motor y la falsificación de los documentos del mismo, ha agudizado aquellas encontradas posiciones jurisprudenciales.

Así por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación llegó a declarar la inconstitucionalidad del artículo 38 del citado decreto-ley por la irracionalidad de sus penas, en particular la del artículo 166.

En cuanto a la modificación, adulteración o falsificación de la numeración del motor y/o chasis del automotor, a los que añade el artículo 33 del decreto ley, ha traído también graves consecuencias en su aplicación. La mayor de ellas es la que resulta de fallos que declaren la impunidad de tales maniobras en base a la siguiente circunstancia: el decreto ley menciona "la numeración estampada por el Registro..." y éste no estampó número alguno en motores o carrocerías (los automotores actuales no tienen chasis).

Con la reforma proponemos una ampliación del agravante por hurto o robo porque abarca no sólo a los automotores (como lo establece el artículo 38 del decreto ley) sino también a todo vehículo. Y tal como lo dijera la exposición de motivos de la ley 17.567: "La preferente protección legal no se fundamenta en la naturaleza misma del objeto, sino en la necesidad impuesta a su propietario de dejarlo en determinadas situaciones que llevan consigo un riesgo. A diferencia del artículo 38 de la Ley de Automotores, el inciso se refiere a toda clase de vehículos".

Respecto a la modificación del inciso 3º del artículo 163 del Código Penal, se hace necesaria debido a que, si dejáramos la actual redacción, el hurto de automotores no tendría agravante; y agregamos "llave verdadera... retenida", porque es una situación que suele suceder frecuentemente.

Los supuestos de ocultación, destrucción o inutilización de documentos del Registro de Propiedad Automotor (artículo 34) encuentran debida protección en el artículo 255 del Código Penal. Las falsificaciones de títulos de propiedad o cédula verde del automotor (artículos 35 y 36) están expresamente previstas en el artículo 292, párrafo segundo del Código Penal.

Creemos que no es necesario derogar el artículo 37 del decreto ley, porque el mismo no plantea controversias y su normativa tiene aplicación práctica.

Con la redacción que proponemos del artículo 289 del Código Penal, los casos puntuales de adulteración o alteración de la numeración de motores, chasis o patentes, aparecen claramente incluidos en el inciso 3º. Los dos primeros incisos, que abarcan las distintas figuras del actual artículo 289, siguiendo la buena técnica legislativa y la de la ley 17.567, son más claros.

Con la reforma resultará eficaz la tutela de la propiedad de automotores, mediante la correcta penalización de los actos que atenten contra la misma, y la normativa propuesta, destinada a esa protección, impedirá que en el futuro, queden impunes delitos como, por ejemplo, el de "autos dobles".

Enrique Martínez Almudevar.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarreal. — Señor presidente, señores senadores: esta Cámara se encuentra hoy abocada a tratar de dar solución a un problema jurídico penal que data de treinta y ocho años atrás, tiempo que lleva cumplido el decreto ley — de

facto, por supuesto— 6.582/58, ratificado en su momento por la ley ómnibus 14.467.

Dicho decreto ley instituyó un régimen penal especial para los delitos que se cometiesen contra la propiedad de ciertos vehículos automotores —no todos— y estableció también figuras especiales para ciertos delitos contra la fe pública, contra falsedades de documentos relacionados con automotores y, más precisamente, relacionados con ciertas marcas o números identificatorios de vehículos automotores.

Por otra parte, desde hace más de tres años se vienen arrastrando —creo que cabe utilizar el término— los intentos legislativos para dar solución a este verdadero entuerto jurídico penal, no sólo a través de iniciativas de distintos diputados sino también de senadores.

En efecto, hubo una sanción por parte de la Cámara de Diputados en 1993 en orden a una iniciativa del diputado Antonio María Hernández, la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara baja, y también se presentaron en este cuerpo diversos proyectos, entre los que puedo mencionar el del señor senador Martínez Almudevar, el del ex senador por Córdoba doctor Joaquín Cendoya y uno de mi autoría.

Según el sistema penal vigente actualmente, si un individuo se apodera de un automóvil —ajeno, desde luego— usando por ejemplo una copa de vidrio rota o un bastón a modo de garrote como arma o como amenaza de violencia inmediata contra el dueño, el conductor del vehículo o quien ejerce la guarda de dicho automotor en ese momento, y si es sorprendido, aprehendido, procesado y condenado, el juez no puede imponerle una pena mínima menor de los nueve años de prisión, porque eso es lo que surge del artículo 38 de ese decreto ley, que sigue vigente, con relación al artículo 166, inciso 2º del Código Penal.

En cambio, si ese mismo individuo del ejemplo en vez de armarse con una copa rota sale con un revólver cargado de su casa y en la calle mata a tiros al primero que se le cruza, en caso de ser condenado tendrá una pena mínima —paradoja mediante— de ocho años de prisión.

Y si dicho individuo, con el mismo revólver cargado, en vez de apoderarse ilegítimamente de un automóvil —tal vez de muy viejo modelo y barato— se adueña de una motocicleta mucho más costosa —de último modelo, que anda por ahí luciendo su propietario en buena compañía, como suele suceder generalmente con las motos importantes—, la pena mínima es de cinco años de prisión según el sistema penal vigente.

Y si ese mismo individuo con el mismo revólver en vez de apoderarse de la motocicleta cara y ostentosa —y bien acompañada—, se apropia, supongamos, de la bicicleta que conduce un humilde obrero que usa ese medio de transporte para ir a su trabajo, también tiene pena mínima de cinco años.

Estas, entre otras incongruencias escandalosas, son la verdadera piedra del escándalo —valga la redundancia— que motiva nuestra preocupación.

Toda esa demora en la solución del problema se debe en parte —y es justo decirlo, aunque pueda resultar antipático para quienes aspiran al beneplácito de los medios de comunicación, y a veces de incomunicación— a las opiniones ligeras, superficiales e indoctas de ciertos comunicadores —yo recuerdo particularmente a dos, que tienen características comunes en cuanto a que ambos presumen de ser amigos del presidente de la Nación y nunca han tenido el menor roce con las disciplinas jurídicas, salvo cuando son querellados— que han dicho que el propósito de los legisladores que estamos apoyando esta iniciativa legislativa no ha sido otro que el de favorecer a los ladrones de autos, ya que estaríamos disminuyendo las penas.

Ha habido un periódico que el 14 de noviembre de 1994, cuando esta iniciativa estaba en el Senado, dijo textualmente en un título bien destacado: "No todas son malas en el país: estímulo al chorro".

Lo cierto es que esta anomalía se viene arrastrando en virtud de algunas paradojas que se han dado en las iniciativas de gobiernos de facto y de jure. Porque sucede que este régimen penal draconiano y protector exclusivamente de ciertos vehículos automotores fue derogado expresamente por dos leyes dictadas durante el gobierno de facto del presidente Onganía, volviéndose así al sistema del Código Penal, que encuadra dentro de las normas comunes a los delitos contra la propiedad automotor.

Hete aquí que en 1973, apenas asumido el gobierno de jure del presidente Cámpora, se deroga toda la legislación de facto e, inadvertidamente, se deja vigente o restablece la vigencia de aquel decreto ley de facto dictado por la llamada Revolución Libertadora.

Con posterioridad, cuando sobreviene el llamado Proceso de Reorganización Nacional, y advertidas las autoridades de esta anomalía que se había producido, es decir que el régimen de jure había restablecido inadvertidamente una norma de facto, se procede a dictar una ley que derogó

las leyes de facto, o sea que vuelve el sistema del Código Penal por sus fueros.

Pero más adelante, superada la dictadura militar, el gobierno democrático, a principios de 1984, paradójicamente a través de la sanción de la ley de defensa de la democracia, derogó la anterior norma de facto, con lo que otra vez recobraba vigencia aquel decreto ley dictado por la Revolución Libertadora.

Entonces, se daba la paradoja de que los gobiernos de facto derogaban las normas dictadas por los gobiernos de facto y los gobiernos de jure restablecían aquellas normas primigenias de los gobiernos de facto. Esta es, en resumidas cuentas, la historia legislativa de este asunto; malhadado asunto.

La respuesta jurisprudencial a estas anomalías empezó a gestarse en 1986 y 1987, cuando ante la duda respecto de la vigencia de este régimen, se dictó un plenario en la Cámara Nacional Criminal y Correccional —en el caso llamado “Pillado”— y luego otro fallo plenario en la Cámara Federal de Mendoza, que establecieron sin disidencias la vigencia de estas normas draconianas.

Así, enseguida empezaron a proliferar los fallos de diversos tribunales, incluidos los componentes de esta Cámara Criminal, que declararon la inconstitucionalidad de esas normas de facto, pero no por ser de facto, porque en definitiva ellas habían sido ratificadas por una ley omnibus, sino por la enorme desproporción que implicaban y que, en opinión de algunos de los jueces que votaron en ese sentido, también significaban una violación a la garantía de igualdad, establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional, y a la innominada de razonabilidad, amén del principio general contenido en el artículo 33 de nuestra Carta Magna.

Este criterio jurisprudencial que declaraba la inconstitucionalidad de estas normas fue también compartido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Gómez” y “Martínez”, dictados en junio de 1989, en los que por mayoría de votos, ya que hubo disidencias al respecto, se pronunció categóricamente sobre la inconstitucionalidad en este caso preciso de la escala penal del robo de automotores mediante el uso de armas.

Y aclaro que según la dogmática penal se entiende por “arma” no sólo las convencionales sino también cualquier instrumento que sirva como amenaza de violencia inminente. Asimismo, debo aclarar que estas hipótesis que lancé al principio, acerca de la copa rota y del bastón usado como eventual garrote, no son

fruto de mi imaginación sino que se trata, en rigor, de casos jurisprudenciales.

Este criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud del principio de respeto y valor jurisprudencial de sus fallos, fue seguido durante varios años por todos los tribunales hasta que en 1991, en la causa “Pupelis” —así se llamaba el sentenciado en aquel momento— la Corte ya, con su actual integración de nueve miembros y también con votos disidentes, decidió que la norma no era inconstitucional o, mejor dicho, que el Poder Judicial no podía expedirse sobre la constitucionalidad dado que la cuestión en juego era exclusivamente de ponderación legislativa pues hacía a la proporción o desproporción de las penas. No obstante, la propia mayoría, que dijo que la Corte no podía declarar la inconstitucionalidad de las normas, estimó que las penas previstas eran evidentemente desproporcionadas, tanto es así que el doctor Levene, que conforma con su voto la mayoría de la Corte en este caso, propugnó dirigirse mediante oficio al Congreso de la Nación encareciéndole que se hiciese cargo de la cuestión y modificase estas escalas penales realmente escandalosas por lo draconianas.

Ese mismo criterio de dirigírle oficios al Congreso ha sido seguido luego por diversos tribunales, tanto de la jurisdicción federal como de las jurisdicciones provinciales. Lo cierto es que la impugnación de inconstitucionalidad tiene sustento normativo, aunque no sea exactamente el del principio de igualdad. Pero también es cierto que a esta altura no importa tanto si la norma es inconstitucional o no sino la ponderación de este principio de proporcionalidad, equilibrio y armonía en las diversas disposiciones del Código Penal.

La respuesta jurisprudencial es la que he señalado, mientras que la respuesta doctrinaria —también sin excepciones— ha marcado la desproporción enorme de las escalas penales. Las únicas disidencias han recaído en esta cuestión ya indicada, en el sentido de si le cabía al Poder Judicial declarar la inconstitucionalidad dadas las atribuciones del Poder Legislativo de fijar la política criminal.

La respuesta legislativa —como ya he dicho— ha sido el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en 1993 en base a la iniciativa presentada por el diputado Antonio María Hernández a fines de 1992 y que oportunamente llegó en revisión al Senado. A su vez, en esta Cámara se han presentado los proyectos que ya he referido y que caducaron por el transcurso de los dos años de rigor pese a que en todos los casos se

produjeron dictámenes de comisión unánimes o sin disidencias fundamentales, más allá de algunas diferencias de detalle en los contenidos de cada uno de ellos.

En el caso concreto que nos ocupa, se trata de un proyecto reproducido por el señor senador Martínez Almudevar. El despacho respectivo, que hemos suscripto representantes de diversos bloques de este Senado, es favorable, sin disidencias, salvo en un solo punto, que se refiere al artículo 37 del régimen que se propone derogar, que prevé la figura del hurto de uso. Al respecto, la comisión entiende que el hurto de uso, en el cabal sentido de la figura que reprime nuestro Código Penal, está adecuadamente contemplada en el artículo 162, que es el que prevé el delito de hurto simple. Esta es la única corrección que se le ha hecho al proyecto.

Ahora bien, sin insistir demasiado por ahora —tal vez lo haga un poco más adelante; prometo no ser demasiado extenso porque no lo amerita la cuestión—, quiero decir que las objeciones de carácter comunicacional que se le han hecho a esta iniciativa no se han guiado por la lectura y mucho menos por la reflexión sobre su contenido sino por una mera impresión derivada del hecho de que se rebaja el mínimo de algunas escalas penales.

Lo cierto es que entre otras virtudes del nuevo régimen penal que se propone —que no es otra cosa que volver al sistema del Código Penal— deben señalarse las siguientes: en primer lugar, con este proyecto se amplía la protección penal, no circunscribiéndola exclusivamente a los vehículos de cuatro ruedas o más. Vale decir que se amplía a toda clase de vehículos.

Porque entre otras cosas habría que hacer notar que la democracia, que ahora está expresamente mencionada en la Constitución —no como antes, que no decía nada— implica desde el punto de vista de la política criminal que tanto vale o puede valer la propiedad de un automóvil como la de una bicicleta, sobre todo cuando la bicicleta es el único medio de transporte que tiene, por ejemplo, un obrero que debe trasladarse a su lugar de trabajo.

Digo esto porque no es posible que nuestra política criminal privilegie la propiedad del rico —que en la mayoría de los casos estará asegurada— sobre la propiedad del pobre, como si no fuese eventualmente mucho más dañoso y mucho más odioso —para decirlo en términos propios de la política criminal— el que le roba la bicicleta a un modesto obrero que el que se apo-

dera de un automóvil importado seguramente asegurado por su dueño.

Como si en definitiva no fuera absurdo —y es uno de los mayores reproches que cabe hacerle a este régimen del decreto-ley de facto de 1958— que se establezcan escalas penales mayores o menores no en función del mayor o menor daño o peligro que impliquen las formas que se usan para el apoderamiento ilegítimo de la cosa y no en función de las situaciones de mayor o menor protección por su propio dueño en que se encuentran las cosas de acuerdo con las circunstancias de su uso —desde el punto de vista penal no es lo mismo apoderarse de una vaca que se encuentra pastando en el campo que de un animal que se halla en un recinto cerrado, con propiedad acotada— sino establecer la diversidad de escalas penales en orden simplemente a la naturaleza intrínseca de una cosa. Por ejemplo, el caso de un vehículo automotor de cuatro ruedas no resiste la menor crítica desde el punto de vista de la política criminal.

Entre otras cosas, entonces, lo primero que debe señalarse de esta reforma que se propone es que amplía la protección eliminando lo de la circunscripción a los vehículos automotores de cuatro ruedas y llevándola a todo tipo de vehículos.

En segundo lugar, acoge el principio de política criminal según el cual a mayor desprotección forzosa por el dueño de la cosa mueble, se incrementa la amenaza penal. ¿Por qué? Porque se incorpora como una de las formas de hurto calificado la del vehículo que se encuentre en la vía pública, que es la situación normal cuando se lo está usando.

En tercer término, como otra de las mejoras que se introduce, evita u obtura —mejor dicho— un resquicio de impunidad que deja el régimen de la ley penal de facto, que se refiere a las alteraciones que se produzcan en la numeración identificatoria de los chasis o motores de los vehículos automotores estampada, dice el actual régimen, por el Registro de la Propiedad Automotor.

Es un resquicio para la impunidad resultante de que el Registro de la Propiedad Automotor de ninguna manera estampa número en el chasis —ya no hay más chasis— ni en los motores ya que estos números vienen estampados de fábrica. Lo único que hace el Registro de la Propiedad Automotor es dejar constancia de la numeración.

Por esta vía se estaban escapando muchos de los que trabajan en la industria de los autos mellizos, figura que más de una vez quedaba fuera

de punición por las virtudes de abogados habilitados y por el vicio —digamos— de este decreto ley que ahora procuramos derogar.

En cuarto lugar, la calificante de hurto cuando se trate de vehículos dejados en la vía pública mejora la protección de toda clase de vehículos.

Prácticamente ya es impensable la hipótesis de hurto simple de un vehículo porque para que no haya calificante sería necesario que no se use una llave falsa, que no se produzca ninguna forma de coerción, naturalmente, que no se haga con escalamiento, que no se haga en despojado, etcétera. Basta que la cosa esté en la vía pública para que el hurto sea calificado.

También se incrementa la protección porque se incorpora como otra hipótesis de hurto calificado, vale decir, con pena mayor, el caso de que el apoderamiento se consuma mediante el uso de la llave confiada por el dueño, o sea, retenida por quien consuma el delito.

Hasta la fecha, la figura de calificación penal implicaba la necesidad de que la llave hubiera sido hallada sustraída. Ahora se le agrega "retenida"; porque se trata de una hipótesis que también se da: se confía la llave a alguien para que guarde o custodie el vehículo y éste se aprovecha de esa circunstancia para apoderarse ilegítimamente del automotor. Esta hipótesis está incorporada en la presente reforma.

Al volverse al régimen del Código Penal mediante la supresión del artículo 36 del decreto ley, queda inequívocamente agravada la pena respecto de quienes falsifiquen los documentos acreditativos de la propiedad del automotor, vale decir, el título del automóvil y la llamada cédula verde. La escala penal correspondiente es la del artículo 292, segundo párrafo, del actual Código Penal.

Por otra parte, se restituyen a sus verdaderos alcances figuras y penalidades, otras hipótesis delictivas, que son las que se obtienen mediante la incorporación y la nueva redacción del artículo 289 del Código Penal, remitiendo a sus figuras naturales las previstas por el artículo 255, relativas a la destrucción o inutilización de documentos del Registro de la Propiedad Automotor, a efectos de que cada hipótesis delictiva encaje exactamente en el capítulo correspondiente del Código Penal, con penas que guarden proporción entre sí.

Creo —y me expreso mal puesto que la doctrina lo sostiene unánimemente— que en esta cuestión de las penas draconianas del célebre decreto ley, no sólo subyace un error bastante ingenuo, cuya naturaleza de error está demos-

trada ampliamente por la estadística criminal —me refiero al hecho de que la amenaza penal abstracta significa un factor disuasivo de la conducta criminal— sino también una cierta noción mágica del derecho.

En este momento, recuerdo al célebre jurista alemán Hans Kelsen, quien en su ensayo llamado *Naturaleza y sociedad* explica que la idea de justicia tiene un origen mágico. Se refiere a la magia como elemento que dota de alma, de ánima, a todas las cosas naturales: los árboles, los animales y las piedras, y las iguala al hombre. En esto, existía una especie de idea de retribución, para denominarla en términos actuales. Debía llevarse a cabo un sacrificio para que lloviera o dejara de hacerlo, si la lluvia era dañosa.

Esa idea de retribución nacida en el hombre primitivo de la magia, es la que ha dado origen —luego, con la civilización— a la idea de justicia, que es diferente de la de retribución.

Me parece que quienes proyectaron y sancionaron aquel decreto ley estaban un poco influidos por esa idea mágica propia del hombre primitivo, que fue dejada de lado por la civilización.

El hombre primitivo —explica Kelsen— cumplía la venganza no como un placer sino como una obligación. Debía andar y sufrir largas jornadas para cumplir con la venganza. Por ello, las más de las veces era una carga, no un placer.

Esa idea de venganza ha sido sustituida felizmente por los nuevos conceptos, desde la civilización.

Creo que no es necesario que me extienda demasiado para seguir fundando y arguyendo que esta idea de las penas draconianas como disuasión, francamente es desmentida por la realidad. En verdad, lo que disuade no son las penas conminadas en abstracto sino las sentencias condenatorias efectivamente dictadas; vale decir, el hecho de que los jueces hagan justicia.

Desde este punto de vista no sería ocioso recordar —hace poco ha salido un artículo del ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Fernando Galmarini— que nuestras cárceles están superpobladas en un 70 por ciento por individuos que no están condenados sino procesados; es decir, por gente que espera sentencia. Esto me lleva —y pido perdón por lo deshilvanado de esta digresión— a que aclare otro punto. Ultimamente tampoco ha faltado editorial que se haya hecho eco del criterio de que los reclamos de los amotinados en las cárceles incluían también una petición en el sentido de que se apruebe este proyecto de ley. Se ha

dicho que no sería conveniente que el Congreso se haga eco de esta suerte de coacción.

Digo que hay que tener en cuenta por lo menos el tiempo desde que se arrastra la iniciativa y los criterios unánimes que han sido expuestos para su aprobación desde 1992, para no dejarnos impresionar por este tipo de consideraciones. La reforma de este régimen es un reclamo unánime, no de los procesados ni de los amotinados sino de la doctrina y de la jurisprudencia de nuestros tribunales, desde la Corte Suprema de Justicia hacia abajo.

Creo que con esto quedan suficientemente explicados en general los fundamentos de este proyecto. Me resta decir, quizá, que la última virtud que debe señalarse — última en el orden de enumeración y no de importancia — es que de esta manera volvemos a que el Código Penal sea un código penal, aunque parezca una perogrullada. ¿Por qué? Porque restituimos figuras de delitos contra la propiedad, contra la fe pública y, en algunos casos, contra la administración pública a la estructura o sistema que debe constituir todo código penal.

Se supone que un código es estructura y es sistema porque sus diversas disposiciones tienen un principio rector, contemplan un equilibrio y una proporción determinados y atienden a la importancia relativa de los diversos bienes jurídicos que se trata de proteger. Aquí, en última instancia, lo que ha ocurrido con esto es que el decreto ley que actualmente está vigente subvierte la escala de valores fijada por nuestra Constitución, desde el mismo momento en que juzga que es más digno de defensa la propiedad de un vehículo automotor que la vida misma, que es la razón de ser de todos los otros derechos.

Con esto — repito — están suficientemente expuestos los fundamentos en general de la iniciativa. Desde luego, quedo a disposición de los señores senadores para el tratamiento en particular o para cualquier otra inquietud.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos, Partido Justicialista.

Sr. Alasino. — Señor presidente: este proyecto de ley llega a este recinto para ser tratado por tercera vez. La primera ocasión estaba contenido en el Orden del Día N° 780/94 y, en virtud de una serie de dudas que generaba, fundamentalmente en algunos legisladores radicales, volvió a comisión para ser reestudiado, y así lo hicimos.

Nuevamente emitió dictamen la comisión, en oportunidad en que yo la presidía, pasando a in-

corporarse el asunto en el Orden del Día N° 745/95, que no llegó a sancionarse porque se levantó la sesión por falta de quórum.

El proyecto que estamos considerando se originó oportunamente en la Cámara de Diputados como iniciativa del diputado Antonio Hernández, presidente de la Comisión de Legislación Penal y venía con la decisión unánime de la Cámara de Diputados en su aprobación. Además, siendo el autor un hombre muy estudioso y vinculado al derecho penal no había merecido observaciones; y la Corte, entre otras cosas, había solicitado reiteradamente la finalización de la desproporcionalidad de penas que imponía el decreto que hoy vamos a derogar.

Vamos a tratar este proyecto — originalmente era del senador Martínez Almudevar — porque por el paso del tiempo caducó el orden del día que había tenido origen en la Cámara de Diputados y que tenía como principio el proyecto del señor diputado Hernández.

Reitero que vamos a tratar un proyecto que prácticamente repite el del diputado Hernández. El proyecto del senador Martínez Almudevar trae modificaciones que en realidad han mejorado levemente el que la Cámara de Diputados había aprobado y que tenía origen, como dije, en el del diputado Hernández.

Este Orden del Día N° 214 introduce varias modificaciones al Código Penal, como bien decía el senador por Catamarca en cuanto a los delitos de hurto agravado y de falsificación. Obviamente se derogan varios artículos, creo son del 36 al 39, del decreto ley 6.582 del año 58.

¿Cuáles son los principales puntos? Para no repetir lo que con tanta precisión ha dicho el senador por Catamarca, en realidad las severas penas que establecía el decreto que he mencionado, vulneran la economía del Código Penal y los principios de igualdad ante la ley y proporcionalidad de penas.

Segundo: el mínimo de penas que prevé el artículo 38 del decreto es casi la mitad del máximo. Se aleja entonces sustancialmente de la escala penal del Código.

Tercero: en la calificación del delito de robo de automotor con armas el mínimo de nueve años es superior al mínimo del Código para el homicidio simple. El decreto ley, como bien decía el senador por Catamarca es una norma de facto inadvertidamente restaurada en 1983.

Todas las conductas de los artículos del decreto que se derogan ya se encuentran tipificadas en el Código Penal; las que no tienen tipi-

ficación se introducen a través del presente proyecto del senador Martínez Almudevar.

Toda la doctrina, la jurisprudencia y la Corte —por lo que voy a decir más adelante— apoya las modificaciones y cree que el Congreso debe intervenir para solucionar y superar la inseguridad jurídica que instaura la existencia de dos normas: la del decreto al que hago referencia y la del Código Penal.

Además, la única diferencia en la redacción con las anteriores oportunidades en que llegó al recinto es el agregado al inciso 3) del artículo 163 del Código Penal del término "retenida", para contemplar la calificación del hurto cuando se emplea una llave verdadera que ha sido retenida y no una llave verdadera que ha sido sustraída. Es decir emplear una llave para hurtar objetos cuando esta llave ha sido confiada a una persona, que es la que comete el delito calificado; a diferencia del caso de la llave sustraída o hallada que también contempla el mismo artículo.

El tema de la desproporcionalidad de penas fue llevado a la Corte en los autos "Martínez, J. A. y Gómez, R.", el 6 y el 8 de junio de 1987. La Corte resolvió que la escala penal era inconstitucional por conculcar los principios constitucionales de igualdad y de proporcionalidad de penas.

Para que mi intervención no sea muy extensa, voy a pedir que se incorporen al Diario de Sesiones algunas consideraciones mías sobre el tema. Solamente me voy a dedicar a señalar por qué el proyecto no despenaliza conductas, que es lo que en algún momento se impuso en los medios.

Se decía que nos aprestábamos a sancionar una norma que tenía origen en el proyecto del diputado al que me he referido anteriormente y que producía una despenalización de penas, con lo cual se produciría un éxodo de delincuentes o no se condenaría a los que hurten automotores.

El argumento que se daba es que con la derogación de algunos tipos penales del decreto 6.582/58 quedaban impunes varias conductas. Pero esto no es así. Todas las figuras derogadas se encuentran previstas en el Código Penal; y las que no lo están se introducen en la iniciativa que se va a votar hoy.

Quiero hacer una taxativa referencia a estos puntos porque es importante que por lo menos —como dice el senador por Catamarca—, no se recoja este tipo de razonamientos en los medios, que él dice supuestamente que son amigos del presidente.

Sr. Villarreal. — Ellos dicen.

Sr. Alasino. — El único que no dice nada es el presidente.

Primero: el artículo 33 del decreto reemplazado por el nuevo inciso 5° del artículo 289 se refiere a la falsificación de la numeración individualizadora de un objeto registrable.

Segundo: el artículo 34 está contemplado en el artículo 294 del Código Penal. Se refiere a la destrucción o supresión de un documento público.

Tercero: la figura del artículo 35, inciso 1°, queda encuadrada en el artículo 292, segundo párrafo, del Código Penal; esto es, cuando un documento adulterado se refiera a la propiedad automotor.

Cuarto: la hipótesis del inciso 2° del artículo 35 quedará subsumida en el nuevo inciso 5° del artículo 289 del Código Penal: el que modifica o altera la numeración individualizadora de un objeto registrable.

Quinto: la conducta prevista en el artículo 37 del decreto que se deroga queda encuadrada en el artículo 173, inciso 7°, del Código Penal: usar un vehículo ajeno en forma ilegítima.

Sexto: la antes aludida figura del artículo 38 está prevista en el artículo 166 del Código Penal: el robo con armas.

Séptimo: finalmente, el artículo sin número agregado al decreto se encuentra albergado en el artículo 293 del Código Penal, conocido como falsedad ideológica.

Ajustar la legislación penal a los parámetros del Código Penal no implica de ninguna manera adoptar escalas penales nimias o benignas.

En definitiva, se derogan los artículos 33 a 39 del decreto-ley 6.582/58 y se introducen modificaciones a dos artículos del Código Penal para contemplar dos figuras no previstas en el mismo y que son derogatorias de aquel decreto.

Lo que perseguimos es homogeneizar los criterios penales de leyes especiales con el código de fondo, dando seguridad en el juzgamiento de las conductas y, además, estableciendo con precisión cuáles son las puciones que cada una de estas conductas delictivas debe tener.

Nosotros estamos convencidos de que la protección de la propiedad del automotor no puede depender de la gravedad de penas con que se conminan ciertos delitos, sino de la eficacia de la tarea de seguridad y prevención del delito. Esto es oportuno decirlo porque pretendemos que el tratamiento público que se haga de este tema sea en la dirección que lo ha fundado el señor senador por Catamarca; y lo que hacemos nosotros

creemos que mejora sustancialmente esta cuestión penal y, además, pone precisión en las sanciones que las conductas delictivas tienen.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: voy a solicitar la inserción del Orden del Día N° 780, del 28 de octubre de 1994, puesto que contiene todos los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios relativos al tema en consideración por lo cual estimo que sería interesante su incorporación al Diario de Sesiones a los efectos de una mejor comprensión del proyecto y de sus antecedentes.

Sr. Presidente. — En primer lugar, se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.¹

Se deja constancia de que ha sido aprobado por unanimidad en general y en particular.

Corresponde votar a continuación las solicitudes de inserción formuladas por los señores senadores por Catamarca y por Entre Ríos.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.¹

10

CONCURSO ANUAL DEL H. SENADO DE LA NACION - LEGISLADOR JOSE HERNANDEZ

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Cultura, de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de los señores senadores Ludueña y Cendoya por el que se instituye un concurso nacional y anual de ensayos a denominarse "Concurso Anual del Honorable Senado de la Nación - Legislador José Hernández", sobre el tema "Identidad y futuro de la Argentina" (Orden del Día N° 317).

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Cultura, de Educación y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de resolución de los señores senadores Ludueña y Cendoya, instituyendo un concurso nacional y anual de ensayos a denominarse "Concurso Anual del Honorable Senado de la Nación - Legislador José Hernández", sobre el tema "Identidad y futuro de la Argentina" y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

RESUELVE:

1º — Instituir un concurso nacional y anual de ensayos, que se denominará "Concurso Anual del Honorable Senado de la Nación - Legislador José Hernández", sobre el tema "Identidad y futuro de la Argentina". Las bases, organización y ejecución de este concurso anual estarán a cargo de la Comisión de Cultura del Honorable Senado de la Nación y de la Sociedad Argentina de Escritores.

2º — Otorgar tres premios consistentes en \$ 10.000, \$ 5.000 y \$ 2.500, en carácter de primero, segundo y tercer premio respectivamente, a quienes así resulten seleccionados; sumas éstas que serán solventadas mediante los fondos presupuestados para el desenvolvimiento de este cuerpo.

3º — La evaluación y elección de los trabajos será realizada por un jurado formado *ad hoc* por el presidente de la Comisión de Cultura del Honorable Senado de la Nación y de la Sociedad Argentina de Escritores.

4º — Su resultado así como el nombre de los seleccionados y su orden de mérito será informado a este cuerpo.

5º — Dispónese como fecha de entrega de los premios que se instituyen el 10 de noviembre de cada año, fecha de nacimiento del legislador José Hernández.

De acuerdo con el artículo 120 del Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 29 de abril de 1996.

Carlos L. de la Rosa. — Olijela del Valle Rivas. — Carlos A. Verna. — Fernando de la Rúa. — Antonio F. Cafiero. — César Mac Karthy. — Cristina Fernández de Kirchner. — Jorge J. Massat. — Leopoldo R. G. Moreau. — Bernardo P. Quinzio. — Daniel Baum. — Emilio M. Cantarero. — Conrado H. Storani. — José L. Gioja. — José A. Romero Feris. — Remo J. Costanzo. — José O. Figueroa. — Luis A. León. — José M. Sáez. — Jorge A. Villaverde.

¹ Ver el Apéndice.